

Trabajo Fin de Grado

Pensión de viudedad y violencia de género: Una radiografía a la Seguridad Social

Autor/es

Valeria Ruiz Cabello y Tatiana Miguel Chamizo

Director/es

María Caridad López Sánchez

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

2021

Pensión de viudedad y violencia de género: Una radiografía a la Seguridad Social

Valeria Ruiz Cabello y Tatiana Miguel Chamizo

Resumen

La pensión de viudedad ha cambiado notablemente a través de los años conforme lo ha hecho la sociedad española, ya que ha ampliado su protección jurídica para adaptarse a los nuevos modelos de familia: comenzó con el hombre viudo, luego a los divorciados, posteriormente a los matrimonios homosexuales y parejas de hecho. La finalidad que tenía en un principio era la de proteger en situaciones de necesidad y ahora compensa por la reducción de ingresos que supone la muerte del cónyuge o pareja de hecho y se han extendido criterios de flexibilidad para las víctimas de violencia de género. Es por esto que es de máxima importancia aplicar la perspectiva de género, porque de esta manera muchas mujeres víctimas de violencia de género podrán acceder a la pensión de viudedad y no tendrán que encontrarse en situaciones límite que no le permitan subsistir.

Términos claves: violencia de género, pensión de viudedad, perspectiva de género, seguridad social, problemática de acceso a la pensión de viudedad.

Widow's pension and gender-based violence: an x-ray of the social security

Valeria Ruiz Cabello y Tatiana Miguel Chamizo

Abstract

The widow's pension has remarkably changed over the years in accordance with the changes of the Spanish society, since it has expanded its legal protection in order to adapt to the family new models: it started with the widower man, then, with the divorced men, later it included the homosexual marriages and unmarried partners. At the beginning, its aim was that of protecting in situations of need, and now it compensates for an income reduction entailed by the death of the spouse or the partner, flexibility criteria have also been extended to gender-based violence victims. This is the reason why it is of the highest importance to apply the gender perspective, because, thus, many women who are gender-based violence victims may have the right to obtain a widow's pension and they will not have to face extreme situation in which they may no longer be able to subsist.

Keywords: *gender-based violence, widow's pension, gender perspective, social security, problems to access the widow's pension.*

Índice

Introducción	6
Justificación de la investigación	6
Metodología y estructura de la investigación	7
Objetivos de la investigación	8
Capítulo I. Violencia de género	9
Perfil del agresor	11
Datos estadísticos sobre la violencia de género en España	13
Número de denuncias por violencia de género	13
Porcentaje de mujeres maltratadas	14
Víctimas mortales por violencia de género	16
Número de órdenes de protección solicitadas	17
Capítulo II. Seguridad Social: Perspectiva de género y violencia de género	19
Perspectiva de género en el derecho de la Seguridad Social	19
Violencia de género en el ámbito de la Seguridad Social	21
Capítulo III. Pensión de viudedad	24
Evolución de la pensión de viudedad	24
Pensión de viudedad: cónyuges y excónyuges víctimas de violencia de género	26
Protección especial a las víctimas de violencia de género	28
Pensión de viudedad: víctimas de violencia de género y parejas de hecho	30
La acreditación de la víctima de violencia de género: Experiencia de los Tribunales del Orden Social	32
Conclusiones	36
Referencias	38
Referencias bibliográficas	38
Referencias electrónicas	39
Legislación	41

Índice de tablas y figuras

Figura 1	14
Figura 2	15
Figura 3	16
Tabla 1	17
Tabla 2	18
Figura 4	18

Introducción

Justificación de la investigación

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2020) publicó el informe sobre los 1000 primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, un estudio que analiza los crímenes cometidos durante enero de 2003 y abril de 2019. En este afirman que se perpetró un asesinato machista por semana, generando así una media de 61,3 víctimas mortales durante cada año del estudio.

Más recientemente, el mismo Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2020) publicó un estudio en referencia a los juicios llevados a cabo en el año 2016 y las sentencias posteriormente dictadas en el año 2018 por el Tribunal del Jurado y las Audiencias Provinciales en casos de asesinato y homicidio por violencia de género y doméstica.

En este se analizaron 46 sentencias, en las que 39 de ellas tenían que ver con homicidio/asesinato en el entorno de la pareja; 36 fueron juzgadas por violencia de género y 3 por violencia doméstica íntima¹. De esas 39 sentencias, en el 94,9% de los casos la víctima era una mujer y tan solo el 5,1% era un hombre. Según este estudio, las mujeres tienen un mayor riesgo de ser agredidas y asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas sentimentales.

Las estadísticas reflejan que año tras año se siguen percibiendo casos de violencia de género y feminicidios en toda España, y la ley más actual promulgada sobre la violencia de género en el país, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue anunciada en el año 2004.

Con la aprobación de esta ley se generaron cambios y reformas, no solo en el apartado político y legislativo, sino también en la cultura, consciencia y en el actuar social español. Pero hace falta mucho más, los homicidios y asesinatos siguen ocurriendo y es necesario adaptar mucho más la legislación para de verdad frenar estos sucesos.

Sabemos que estos cambios toman tiempo, y lastimosamente, en España siguen existiendo tantos casos de violencia de género que producen un sentimiento generalizado de fracaso y desilusión, sobre todo de aquellas mujeres (y hombres) que se consideran feministas, porque se siguen viendo caso tras caso en los medios informativos nacionales.

Aún queda mucho por hacer con respecto a este tema, y es importante resaltar que ninguna mujer ni ningún hombre, bajo ninguna circunstancia, debería sentirse desamparada, ni por parte del Estado, ni de la sociedad misma. Y es debido a esto que las mujeres que han sido víctimas de violencia de género tienen el derecho a una pensión de viudedad², aunque en muchas ocasiones, para estas personas es complicado

¹ Información extraída del Análisis de las sentencias dictadas en el año 2018 relativas a homicidios o asesinatos por violencia de género y doméstica.

² Seguridad Social (2020). Violencia contra la mujer. Recuperado el 22 de octubre de 2020 de <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/9b5e05b9-90f9-490d-9fde-0cb3446fed9e#:~:text=Las%20mujeres%20v%C3%ADctimas%20de%20violencia,acreedoras%20de%20la%20pensi%C3%B3n%20compensatoria>.

conseguirla por distintos motivos, como, por ejemplo: aún tenerle miedo a su agresor, no haber reportado la agresión, y básicamente no tener ninguna prueba que acredite los hechos.

Este es un tema muy controvertido en los juzgados de Violencia contra la Mujer y los Tribunales Superiores de Justicia, ya que existen vacíos legales sobre la protección de las víctimas de violencia de género e imprecisiones en cuanto a su regulación, ya que, por poner un ejemplo, hay una falta de precisión a la hora de establecer cuando una viuda es víctima de violencia de género.

Es por esto, que este trabajo de grado pretende abordar la relación entre la violencia de género y la pensión de viudedad, partiendo por conocer los niveles de violencia de género en España y cómo esto impacta a mujeres de todo tipo de condición social en el país.

Así como también efectuar un análisis de las normativas y leyes actuales reguladoras de la violencia de género y la pensión de viudedad para poder entender cómo el Estado las ayuda y cómo este mismo podría ayudar mucho más a las mujeres que han sufrido de algún tipo de agresión por parte de sus parejas sentimentales, con herramientas y mecanismos para protegerlas, así ya estas se encuentren separadas de los mismos.

Y finalmente, indagar sobre la perspectiva de género en el derecho, ya que al tener un conocimiento más cercano en esta área se podrá identificar si siguen existiendo desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito jurídico español.

Metodología y estructura de la investigación

Lo que se pretende con esta investigación es obtener una visión del tema en cuestión para de esta forma poder abordar y tratar los ítems principales que lo rodean, generar recomendaciones para una fase inicial y finalmente, identificar si es necesario realizar a futuro una investigación mucho más profunda y detallada sobre el mismo.

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación, se utilizará una metodología de tipo exploratorio, que consiste en conseguir información previa para identificar el marco conceptual de la violencia de género y la pensión de viudedad.

Y el trabajo estará constituido por 3 capítulos que son clave para entender la complejidad de este tema, como lo son: el Capítulo I, la violencia de género, en la que se abordará desde su definición hasta llegar a las tasas de víctimas por violencia de género y denuncias que se han realizado en España durante los últimos años.

Luego, el Capítulo II, la pensión de viudedad, en la que se explicará qué es, cómo esta prestación protege a las mujeres víctimas de violencia de género y la problemática de acceso a la misma, debido a la serie de requisitos que debe cumplir cada una de ellas para que el Estado pueda otorgárselas.

Y, por último, en el Capítulo III, se explicará la perspectiva de género en el derecho de la Seguridad Social y como esta ayuda o no a la creación de nuevos proyectos públicos que promuevan la igualdad. Todo esto se desarrollará a lo largo del trabajo de grado con el propósito de poder desarrollar y contextualizar un problema tan actual y relevante como lo es la pensión de viudedad y la violencia de género en España.

Objetivos de la investigación

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general establecer la relación existente entre la violencia de género y la pensión de viudedad en España.

En cuanto a los objetivos específicos, se proponen los siguientes:

1. Determinar qué es la violencia de género en España, tanto por definición, como por la normativa que la soporta.
2. Analizar los datos estadísticos sobre la violencia de género en España.
3. Indicar la normativa actual de la pensión de viudedad y la finalidad de la misma.
4. Identificar los requisitos de acceso para la pensión de viudedad, en particular para las víctimas de violencia de género.
5. Examinar la perspectiva de género en el derecho de la Seguridad Social española.

Capítulo I. Violencia de género

El 25 de octubre de 2012 el Parlamento Europeo aprueba la Directiva 2012/29/UE, el que viene a ser el tratado más actual sobre el derecho, el apoyo y la protección de todas las víctimas de delitos, de esta manera la Unión Europea brinda el reconocimiento y ayuda necesaria con respecto a cualquier acto violento que se cometa dentro de sus estados miembros, entre ellos España.

Un año antes, en el 2011, ya se había firmado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en el cual en su artículo 1 define entre sus objetivos el “proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia” y “contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres y hombres”.

En España, el Instituto para la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades define la violencia de género como “una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”. En el país, este tipo de violencia solo se considera de esta manera si la mujer que ha sido agredida tiene o ha tenido algún tipo de lazo sentimental con el hombre que ha cometido el acto violento.

En la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004³), la cual es la normativa más actual sobre la violencia de género en España, se define este concepto en el artículo 1.1 como una “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

Asimismo, en ese artículo de la LO 1/2004 se explica que la violencia de género “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.”

Según García (2018) “la finalidad de la LO 1/2004 es atajar y erradicar la violencia de género, afrontando la cuestión de un modo integral”. Y esta no se enfoca solo en tipificar y sancionar la violencia sobre las mujeres, sino que también se centra en otros ámbitos como la función preventiva y protectora, que son funciones importantes para proteger a este colectivo.

Como hemos podido constatar, esta ley procura brindar una solución a la violencia que se produce en contra de las mujeres en el territorio español; y entre los puntos más relevantes que aborda se encuentran las medidas preventivas, asistenciales, sociales, educativas, de atención a posteriori, de respuesta legal y de protección, entre otras.

La base de la LO 1/2004 es que la violencia de género no solo se centra en la clasificación y sanción de la violencia contra la mujer, sino que intenta brindar una cobertura protectora que cubra diferentes aspectos preventivos. Medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención establecidas en diferentes áreas:

³ Posteriormente, para referirnos a esta norma lo haremos cómo LO 1/2004.

- Ámbito educativo: Las obligaciones del sistema estipulan la difusión del respeto a la dignidad de la mujer y los valores de igualdad entre hombres y mujeres.
- Ámbito publicitario: En este campo, ya sea que se muestre en medios públicos o privados, deben respetar la dignidad de la mujer y su derecho a obtener imágenes no estereotipadas y no discriminatorias.
- Ámbito de la salud: Teniendo en cuenta las acciones de detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas, así como la aplicación de convenios de salud por conductas agresivas por la violencia objeto de esta ley, el convenio se remitirá a los juzgados correspondientes para agilizar los trámites judiciales. Asimismo, se estableció un comité para brindar apoyo técnico, coordinación y evaluación de las medidas de salud bajo la ley.
- Tutela institucional: Se ha establecido una delegación gubernamental especial contra la violencia contra la mujer y el Observatorio Nacional de Violencia contra la Mujer dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para coordinar, recomendar y evaluar todas las acciones en el campo de la violencia de género.

Además, se han establecido unidades especiales para prevenir la violencia de género y controlar la implementación de las medidas judiciales tomadas. Las autoridades públicas desarrollarán un plan de cooperación para asegurar la organización de sus acciones de prevención, atención y persecución de la violencia de género, que debe involucrar a la administración de salud, el Ministerio de Justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales y las agencias de igualdad.

- Tutela penal: La Ley introduce normas de naturaleza penal, mediante las que se pretende incluir, dentro de los tipos agravados de lesiones, uno específico que incremente la sanción penal cuando la lesión se produzca contra quien sea o haya sido la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. También se castigarán como delito las coacciones leves y las amenazas leves de cualquier clase.
- Tutela judicial: Su objetivo es garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia de género en las relaciones intrafamiliares.

Asimismo, se crean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la figura del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer y concurren para ellas los siguientes derechos:

- Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita: en el que se le da garantía de derechos a las víctimas de violencia de género a estar informadas y poder tener asistencia social y jurídica en el caso de que la requieran.
- Derechos laborales y a las prestaciones de la Seguridad Social: en el que se ofrecen programas específicos de empleo para las víctimas de violencia de género, se reconoce y se acredita la situación de violencia de género y se les da derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social planteadas específicamente a su situación, como, por ejemplo: tomar medidas de protección en el ámbito social para lograr la movilidad geográfica, suspender la retención laboral y rescindir contratos.

- Derechos de las funcionarias públicas: en el que se acredita las circunstancias y situaciones de violencia de género, y se le justifica el absentismo o la puntualidad a su trabajo por condiciones físicas o psicológicas provocadas por la violencia de género. De igual forma, también tendrá derecho a organizar su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, entre otros.
- Derechos económicos: se les ofrecen ayudas sociales y de acceso a la vivienda y residencia públicas, así que las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas como un grupo prioritario. También tienen medidas de apoyo económico para que las víctimas disfruten del derecho a la condición jurídica de desempleo cuando rescindan o suspendan voluntariamente sus contratos laborales.

Por otra parte, si una víctima de violencia de género tiene un ingreso mensual inferior al 75% del salario mínimo profesional (excluyendo la proporción de dos pagos especiales), recibirá un subsidio de pago único, siempre que sea por edad, por no contar con una preparación general o especializada y/o un entorno social adecuado que le permita conseguir trabajado de manera sencilla a la víctima de violencia de género.

Ahora bien, el acceso a todos esos derechos no se produce de forma automática, es necesario que se acredite la situación de violencia de género por parte de las víctimas a través de los medios previstos en la LO 1/2004.

Más adelante, en el Capítulo II de este trabajo de investigación abordaremos los derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social, donde desarrollaremos algunos aspectos que están plenamente relacionados con el tema objeto de análisis de este trabajo.

Perfil del agresor

Como se ha podido constatar en la definición otorgada por la LO 1/2004, la violencia de género es el fruto de la gran desigualdad de poder entre los sexos masculino y femenino.

En la mayoría de los casos está especialmente asociada al sexismo, pero hay que ser conscientes de que existe una gran diferencia entre estos dos conceptos. El primero, estadísticamente hablando, sí puede estar asociado al segundo respecto al contexto dado, pero no es un indicador de la violencia. Ya que estas situaciones tienen diferente grado de naturaleza y gravedad.

En primer lugar, hay que comprender que la relación entre el agresor y la víctima es de un sujeto a un objeto. El agresor cree que la pareja es de su propiedad, y la violencia física y psicológica es una herramienta para controlar su comportamiento, dominarla, pero siempre manteniendo su "estatus"⁴. Le permite anular a la víctima y satisfacer sus necesidades sin afectar su autoridad y poder.

Uno de los principales desafíos que se encuentran al realizar investigaciones sobre las relaciones violentas entre la pareja es determinar cuáles son las características de los hombres que crearon y ejercieron esta relación y acción violenta.

⁴ Cabrera, M. (2010). *Poder y Dolor: análisis sociológicos de los factores desencadenantes de la violencia de género en las relaciones de pareja*. Granada, España.

Los primeros estudios (como Dutton y Golant, Murphy et al., Echeburúa y Redondo)⁵ se centraron en encontrar características comunes que distinguen a los hombres que ejercen la violencia, de los hombres que no. Si bien cada uno tiene sus propios rasgos característicos, en la mayoría de los casos se repite un mismo patrón, por lo que pudieron perfilar las siguientes características psicológicas del hombre violento:

- Ofrece una buena imagen pública.
- Tiene sentimientos de inferioridad y baja autoestima.
- Necesidad de poder y de autoridad; egocentrismo.
- Internalizan estereotipos de género.
- Bajo nivel de asertividad; escasa empatía.
- Personas controladoras, celosas y posesivas.
- Inestabilidad emocional, impulsividad, bajo control de la ira.
- Capacidad de manipulación, auto exculpación y culpabilización de los demás.

Por otra parte, Hamberger y Hastings (1986) para definir el perfil psicopatológico de los agresores afirman que existen 3 tipos de personalidad (no trastornos) entre los agresores: el Narcisista-Antisocial, el Esquizoide-Bordeline y el Pasivo/dependiente-Compulsivo.

En este sentido, se puede ver que los agresores son personas astutas y manipuladoras que intentan verse bien frente al resto de personas. Si nos vamos al ámbito jurídico, el artículo 24.2 de la Constitución Española aborda el derecho de presunción de inocencia, en el que aclara que la prueba de los hechos debe caer en la acusación. Esto lo que quiere decir es que se debe demostrar una actividad probatoria, en la que se pueda inferir los hechos y la participación del supuesto agresor acusado de los mismos.

Por otra parte, el Tribunal Supremo en su STS 725/2007, de 13 de septiembre, manifiesta que las declaraciones de las víctimas tienen un valor inculpatario, así sea la única prueba que tenga para acusar al agresor. Por lo cual, tan solo esa declaración tiene el poder de provocar la debilidad de la presunción de inocencia del acusado.

Eso sí, esta declaración debe cumplir ciertos requisitos para considerarla como prueba, como por ejemplo que el/la declarante tenga ausencia de incredibilidad subjetiva y que la declaración sea ratificada durante todo el procedimiento por medio de datos objetivos.

Pero no solo la Constitución Española y el Tribunal Supremo hacen mención sobre este tema, la LO 1/2004 tiene como propósito solucionar y eliminar la violencia de género de forma integral. Esta incorpora una norma multidisciplinaria al ordenamiento jurídico, y pretende analizar la normativa y jurisprudencia para atender la violencia contra la mujer, que es la desigualdad y vulneración de la igualdad, como la quiebra de derechos básicos como la vida, la dignidad, la salud física y mental, la seguridad y/o la libertad.

⁵ Información extraída de Covas, S., Maravall, J. y Bonino, L. (2009). *Hombres con valores igualitarios: historias de vida, logros alcanzados y cambios pendientes*. Madrid, España: Ministerio de Igualdad.

En los próximos capítulos de este trabajo de investigación se desarrollarán algunos aspectos relacionados con el tema objeto de análisis de este trabajo, como, por ejemplo: los derechos laborales de los trabajadores víctimas de violencia de género y las prestaciones de la Seguridad Social.

Datos estadísticos sobre la violencia de género en España

La violencia de género en España sigue latente. Desde el año 2017 se confirma un patrón de aumento de registros tanto de feminicidios, como de denuncias y órdenes de protección recibidas, tras un relativo descenso y merma registrados entre los años 2011 y 2014.

El incremento posterior de todas estas series, que empieza en el año 2015 y que continúa aumentando en el 2020 refleja el auge que ha tenido este tipo de discriminación de género y el por qué en la actualidad tiene tanta importancia este tema entre la población española.

Desde la Administración Pública, con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades a la cabeza, están realizando distintas acciones para garantizar la igualdad de género desde el Poder Judicial. Por ejemplo, con los enfoques de género en la formación para el funcionariado público y la abogacía, en el que se opera a través de mecanismos compensatorios o correctores de la desigualdad, tal y como lo ha venido haciendo la Seguridad Social con la pensión de viudedad (Marco y González, 2019).

Sin embargo, y paralelamente, están aumentando los casos de violencia de género tanto dentro como fuera de las relaciones con parejas o ex-parejas. Y de esta manera los órganos judiciales españoles se están haciendo cargo de atender los casos de violencia de género, pero se está perdiendo la capacidad de prevenir que esto siga ocurriendo a otras mujeres y hombres.

Número de denuncias por violencia de género

Para conocer el número de denuncias por violencia de género hay que remitirse directamente a las Series Anuales del Consejo General del Poder Judicial, este ente tiene actualizadas las denuncias por violencia de género hasta el año 2019.

En la Figura 1 se pueden detallar las denuncias por violencia de género tramitadas ante los órganos judiciales entre los años 2007 y 2019; el hecho más relevante es que en el año 2017 se recibieron 23.367 denuncias más que en el año anterior (2016), y esa cifra ha ido aumentando en los años posteriores, por lo que se puede ver una tendencia al alza a comunicar a las autoridades sobre hechos de este tipo.



Figura 1. Denuncias por violencia de género tramitadas por los órganos judiciales de España. Nota: Elaboración propia con información del Consejo General del Poder Judicial de España.

Y esta tendencia a comunicar más este tipo de hechos puede deberse a que las mujeres han pasado de estar desinformadas y conformarse con lo que les estaba sucediendo, a obtener consciencia sobre su situación y cómo pueden ejercer sus derechos; por lo que a su vez esto se convierte en este incremento de casos denunciados a las autoridades. De igual manera, las campañas informativas y de sensibilización sobre la violencia doméstica, los derechos de las mujeres y toda la legislación que concierne a este tema, ha ayudado a aumentar las denuncias de este tipo (Instituto de la Mujer, 2003, como se citó en Rincón, 2003).

Porcentaje de mujeres maltratadas

Por otro lado, se puede apreciar que las agresiones hacia las mujeres, para el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, se tipifican como “Porcentaje de Mujeres Maltratadas” y se miden a través de una macro encuesta que no se ha actualizado desde el año 2006 (Ver Figuras 2 y 3).

Es importante destacar que el porcentaje de mujeres consideradas técnicamente como “maltratadas”, que son aquellas que se identifican con el maltrato estructural y sexual⁶, descendió a un 9,6 en 2006, y por otra parte, el porcentaje de mujeres auto clasificadas como “maltratadas”, que son aquellas que lo hacen en aspectos que se refieren al maltrato psicológico y físico⁷, disminuyó a un 3,6 durante ese mismo año.

⁶ Rincón, P. (2003). Trastorno de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica: Evaluación de programas de intervención (tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España.

⁷ Rincón, P. (2003). Trastorno de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica: Evaluación de programas de intervención (tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España.

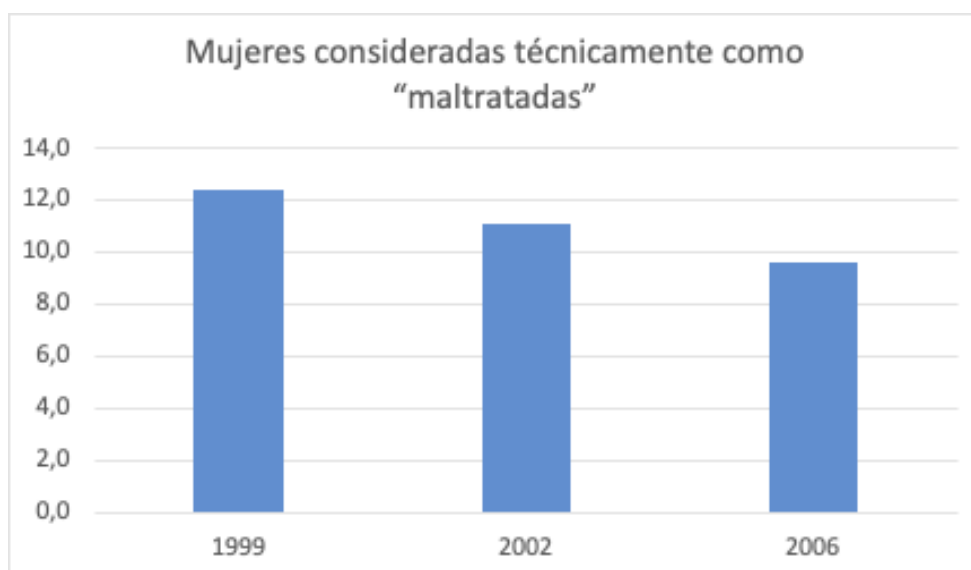


Figura 2. Porcentaje de mujeres consideradas técnicamente como “maltratadas”. Nota: Elaboración propia con información del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

En el año 2006 se consolida una disminución que se corresponde con la tendencia hasta entonces descendente de las denuncias por violencia de género (hasta 2017), y que empieza a reducirse también para las órdenes de protección, como veremos más adelante.

Es muy valioso poder conseguir estos datos, ya que con ellos podemos encontrar a través del maltrato técnico múltiples casos de violencia oculta y de la misma manera se puede desestimar el mito existente que dice que “los malos tratos contra las mujeres son raros e infrecuentes” (Moriana, 2013).

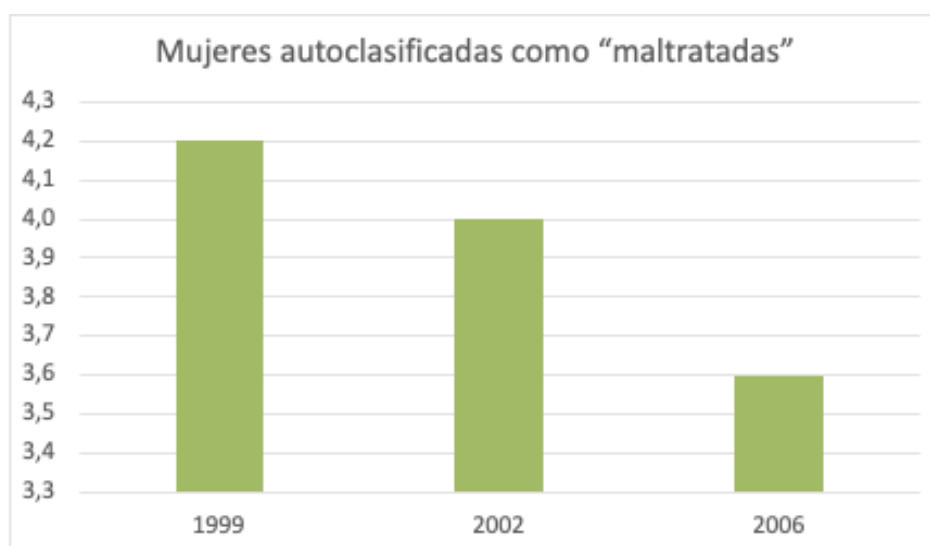


Figura 3. Porcentaje de mujeres auto clasificadas como “maltratadas”. Nota: Elaboración propia con información del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Por otro lado, en otras Series Anuales que provee el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, hacen referencia a datos y cifras exclusivamente de la violencia física, y por tanto, no se desglosan otras formas de violencia como la psicológica, la sexual, la económica o la estructural.

Víctimas mortales por violencia de género

Tomando, por ejemplo, las cifras sobre el número de víctimas mortales que provee el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para los casos registrados de víctimas mortales por violencia de género que habían interpuesto denuncia (Ver Tabla 2), podemos contrastar que se repite el patrón de merma, con un repunte de feminicidios en el año 2014, con 17 casos, que desciende al año siguiente a 13 casos.

Si bien es cierto que desciende, este patrón no es constante, porque se puede apreciar que año tras año a partir del 2014 el número aumenta y disminuye constantemente, por lo que podemos presumir que se trata de una problemática aún no solucionada por los entes competentes.

Tabla 1.

Víctimas mortales por violencia de género que habían interpuesto denuncia.

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020									
		15 junio																	
Solicitud/vigencia de medidas concedidas		Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%	Tot.	%
TOTAL, casos con denuncia previa		10	100	11	100	17	100	13	100	16	100	12	100	15	100	11	100	3	100
- Se solicitan medidas		7	70,0	9	81,8	10	58,8	8	61,5	11	68,8	8	66,7	11	73,3	5	45,5	1	33,3
- Se adoptaron medidas		6	85,7	8	88,9	9	90	6	75	11	100	8	100	11	100	5	100	1	100

* Tot. = Total

Nota: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística.

Así mismo, cabe destacar que, a partir del año 2016, son adoptadas la totalidad de las medidas solicitadas; no se registra una tendencia descendente en los casos a partir de ese año. Pero, por otro lado, debido a que contamos con los datos del primer semestre de 2020 (hasta el 15 de junio), se tendrá que analizar en su momento si existe una tendencia al descenso en los registros a partir del año 2019.

Número de órdenes de protección solicitadas

Respecto a las órdenes de protección solicitadas (Ver Tabla 3 y Figura 4), se confirma la tendencia en aumento de aquellas desde el año 2015, llegando a las 38.501 órdenes en el año 2017, comportándose, así como los anteriores indicadores analizados.

Tabla 2.

Órdenes de protección solicitadas.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total	41.420	41.085	37.908	35.813	34.556	32.831	33.167	36.292	37.956	38.501

Nota: Elaboración propia con información del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

En esta materia, es un avance que las víctimas de violencia de género estén haciendo uso de estos mecanismos jurídicos de denuncia, porque esto quiere decir que la información se encuentra accesible para la víctima, que se están reduciendo las desigualdades jurídicas y que estas personas tienen la confianza suficiente en dichos organismos para que los ayuden con su situación de vulnerabilidad porque tienen mecanismos efectivos que les permiten garantizar sus derechos.



Figura 4. Órdenes de protección solicitadas. Nota: Elaboración propia con información del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Sin embargo, esto es solo un pequeño extracto de una gran realidad, y es que los mecanismos siguen estando desconectados entre sí. Aunque las medidas judiciales, tanto las solicitadas como las adoptadas, siguen en aumento, estos mismos organismos no han logrado corregir y prevenir las causas del incremento en el número de casos de violencia de género.

Lo que sí han hecho estos, es crear mecanismos de atención a partir de las relaciones de pareja, como, por ejemplo, la pensión de viudedad como mecanismo compensatorio dirigido hacia las mujeres por la muerte de su cónyuge-padre de familia.

Capítulo II. Seguridad Social: Perspectiva de género y violencia de género

Antes de comenzar a tratar el tema de la perspectiva de género en el derecho de la Seguridad Social, se llevará a cabo un análisis del término “género” y lo que éste conlleva.

Según Comas, D. (1995) la noción de género hace referencia al conjunto de contenidos, o de significados que se construyen socialmente a partir de las diferencias sexuales. Es decir, en tanto que el “sexo” es utilizado para aludir a las disimilitudes biológicas ligadas a factores fisiológicos (construyendo categorías entre hombres y mujeres).

Al hablar de “género” nos estamos refiriendo al concepto que cada sociedad posee de lo masculino y de lo femenino respecto a las categorías de hombre y de mujer como seres diferenciados en función de su sexo.

La distinción entre sexo y género ha sido muy útil para subrayar que los roles, y conductas de hombres y mujeres son variantes, ya que dependen de elementos fundamentalmente culturales. Podemos decir, por ende, que son algo adquirido y no de carácter innato; son consecuencia de la estructuración entre las diversas formas de interpretar las desemejanzas entre los sexos y atribuir a las mismas un determinado estatuto social (Comas, 1995).

Como hemos mencionado anteriormente, las sociedades atribuyen unas determinadas características y rasgos propios a lo que estiman como “masculino” y “femenino”, y es a partir de ahí donde se determinan las tareas y los deberes sociales de mujeres y hombres. De allí vienen los roles de género, los cuales establecen que las mujeres son las que deben de realizar el trabajo doméstico, subordinándolas a una posición inferior en relación a los hombres, que son los encargados de proveer de recursos y de garantizar el mantenimiento del hogar familiar; lo cual tiene un efecto perjudicial para el género femenino a la hora de reconocer y proteger sus derechos.

Además, el término “género” posibilita descubrir los distintos aspectos que engloba la discriminación contra las mujeres y las tácticas para hacerle frente, lo cual se consigue analizando el procedimiento de socialización de los seres humanos, a través del reconocimiento de los estereotipos y roles que contribuyen a que se produzca esta desigualdad.

Perspectiva de género en el derecho de la Seguridad Social

En definitiva, podemos decir que la perspectiva de género supone un análisis diferenciado de la realidad, en el que se identifican las desemejanzas y desigualdades entre ambos sexos en cualquier tipo de actividad, en todos los sectores y en todas categorías. Según el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (1997):

“Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se

impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad (sustantiva) entre los géneros”.⁸

La perspectiva de género puede implicar una puesta en marcha de proyectos y programas de carácter jurídico, social y cultural que busca restablecer u originar métodos de armonización; los cuales resultan fundamentales para que la labor de los ciudadanos contribuya a promover la importancia de la equidad tanto en las leyes como en la Justicia.

Adicionalmente, es necesario destacar que la igualdad de trato y de oportunidades entre ambos géneros, es un principio informador de nuestro orden jurídico (art. 4 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres⁹) y debe de ser aplicado e integrado con carácter transversal en la actuación de todos los Poderes Públicos (art. 15 LO 3/2007).

Cabe destacar, que el artículo 9.2 de la Constitución Española recalca el deber de los Poderes Públicos para hacer frente a las dificultades que no permitan u obstaculicen la libertad e igualdad del individuo y de los grupos; a la vez que deben de favorecer la intervención de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Por tanto, la perspectiva de género debe aplicarse en los estudios de Derecho, ya que de esta manera se pueden prevenir las visiones sesgadas de los que serán los juristas del futuro¹⁰.

Es por esto que la perspectiva de género contribuye al fomento de la igualdad de los ciudadanos, y sobre todo de las mujeres, las cuales sufren discriminación y quedan relegadas a una posición inferior en el ámbito laboral (trabajos más precarios y peor remunerados)¹¹, económico (tienen mayor peligro de sufrir pobreza o exclusión)¹² y social; todo esto como consecuencia de la masculinidad imperante en nuestra sociedad.

La aplicación de la dimensión de género es imprescindible, especialmente en casos de violencia machista, puesto que resulta clave en la concesión de prestaciones de la Seguridad Social, como, por ejemplo: la pensión de viudedad.

Los órganos jurisdiccionales deben integrar esta perspectiva en la aplicación de todas las normas (tanto procesales [incluyendo las probatorias] como sustantivas) y en tres etapas judiciales específicas:

⁸ Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Documento ECOSOC A/52/3, 18 septiembre 1997 “Coordinación de Políticas y actividades de los organismos especializados y demás órganos del Sistema de Naciones Unidas”.

⁹ Posteriormente, para referirnos a esta norma lo haremos como LO 3/2007.

¹⁰ Marco Francia, M. P. y González Soria, J. C. (2019). Violencia de género y pensión de viudedad de la Seguridad Social en España. La perspectiva de género y el género en perspectiva para la consecución de la justicia material y avanzar en igualdad. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, (Nº Extraordinario 1), pp. 323-343.

¹¹ Conforme el informe “Mujeres en el mercado de trabajo, mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el siglo XXI” del Ministerio de Trabajo publicado en 2019, 2 de cada 3 de los puestos de trabajos más precarios son realizados por mujeres.

¹² Según “El Estado de la Pobreza. España 2020 X Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión” realizado por EAPN España, actualmente la tasa AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion) femenina es del 26%, cifra que es 1,4 puntos porcentuales más alta que la masculina.

tramitación del procedimiento, evaluación de las pruebas y aplicación de la norma sustantiva. Además, de una indispensable flexibilización a la hora de interpretar las exigencias procesales¹³.

Pero no sólo los jueces y tribunales tienen que incorporar la dimensión de género en la realización de su labor, sino que también se debe de hacer a la hora de legislar y en la presentación de demandas por parte de los letrados. De este modo, se conseguirían erradicar los patrones estereotípicos por razón de género en la actividad jurídica, obteniendo relaciones equitativas y no discriminatorias en nuestra sociedad.

Además, es importante que se incorpore la transversalidad de género en los organismos públicos, ya que de esta forma se podría garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades mediante políticas públicas que ayuden a disminuir la brecha entre ambos géneros.

En muchos casos, esta transversalidad se proyecta en materia de Seguridad Social, y esto se traslada a las prestaciones de Seguridad Social bajo la premisa de contribuir y generar avances significativos en materia de género y protección social, que permitan proteger sobre todo a las mujeres de las desigualdades del mercado laboral, tanto en el acceso de la protección sanitaria y de riesgos laborales, así como también en referencia a la brecha en las pensiones que reciben hombres y mujeres.

Violencia de género en el ámbito de la Seguridad Social

Desde la Seguridad Social se toman medidas para reducir el impacto de la violencia contra las mujeres o sus hijos en las situaciones de agresión debido a que cualquier tipo de violencia contra el género femenino se combate de manera integral por los poderes públicos.

Las prestaciones en las que se pueden aplicar algunas de estas medidas son ,las de muerte y supervivencia, que son aquellas que intentan minimizar la situación de necesidad que viven los familiares de un trabajador tras el deceso del mismo. Dentro de ella encontramos las siguientes:

- Auxilio por defunción: este es un subsidio económico que tiene como finalidad cubrir los gastos del sepelio del causante fallecido. El beneficiario en estos casos, será el cónyuge vivo o el sobreviviente de una pareja de hecho, los hijos o parientes que convivieran con el fallecido habitualmente.
- Pensión de viudedad: es una prestación económica de carácter vitalicio que se otorga a las personas que han sostenido un vínculo matrimonial o fueron pareja de hecho de la persona fallecida y que reúnan los requisitos que establece la ley para su obtención. Este tipo de prestación la veremos a detalle en el Capítulo III de este trabajo de investigación.
- Prestación temporal de viudedad: el beneficiario de esta será el cónyuge superviviente que no pueda acceder a la pensión de viudedad por no poder acreditar el matrimonio con el causante durante 1 año o por la inexistencia de hijos en común, siempre y cuando este reúna el resto de requisitos exigidos. Esta prestación siendo temporal, tiene una duración de 2 años.
- Pensión de orfandad y prestación de orfandad: esta es una prestación económica que se le proporciona a los hijos del fallecido y en algunos casos, a los aportados por el cónyuge, cuando estos reúnan los requisitos que exige la normativa.

¹³ Menéndez Sebastián, P. (2017). Pensión de viudedad y “violencia machista”: El enfoque de género desde la interpretación. *RTSS. CEF*, N° 410, pp. 148-154

- Prestaciones en favor de familiares: es un tipo de prestación que se le concede a los familiares (nietos, hermanos, madre y abuelas, padre y abuelos, hijos y hermanos) del fallecido, que hayan dependido económicamente y que hayan convivido con él, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos.
- Subsidio en favor de familiares: esta consiste en un subsidio económico temporal a los familiares (hijos y hermanos mayores de 22 años) del fallecido, que hayan dependido económicamente y que hayan convivido con él, siempre que estos cumplan los requisitos requeridos.

Entre la normativa aplicable para estas prestaciones se encuentran los artículos 171 a 179 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (TRLSS), el Real Decreto 1647/1997 de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, el Real Decreto 1465/ 2001 de 27 de diciembre, de modificación parcial del régimen jurídico de las prestaciones por muerte y supervivencia, Decreto 3158/1966 de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General de Prestaciones Económicas del Seguridad Social, y la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1967 por la que se establecen las normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General.

Es importante aclarar que el contenido en la LGSS debe interpretarse de forma conjunta con el de la LO 1/2004. Y entre sus medidas más relevantes se encuentran las siguientes:

Si una trabajadora se ve obligada a cesar en su trabajo por ser víctima de violencia de género y esta decide suspender el contrato laboral, el plazo de suspensión se considerará como plazo de cotización efectiva a efecto de prestaciones Seguridad Social y desempleo.

Por tanto, ese cómputo de tiempo se tendrá en cuenta para la jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de menores, desempleo y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Y si la trabajadora termina su relación laboral debido a la violencia de género, pueden recurrir a la jubilación anticipada involuntaria siempre que cumplan con otros requisitos especificados en las normas (art. 207 LGSS).

De igual forma, cuando una trabajadora es víctima de violencia de género, esto se toma en cuenta para reducir el cumplimiento de actividades a realizar para poder tener derecho a la prestación por desempleo, disponen de mayores ventajas y facilidades, como, por ejemplo: disminución de las horas presenciales exigidas cuando sea participe en actividades formativas, búsqueda activa de empleo, entre otras.

En el caso de las trabajadoras autónomas que suspendan su actividad laboral, ya sea de forma temporal o definitiva, por violencia de género, no estarían cometiendo una ilegalidad por la Seguridad Social; sólo deben acreditar su situación por un informe u orden de protección de parte del Ministerio Fiscal indicando el tipo de violencia sufrido.

Así mismo, según el artículo 21.5 de la LO 1/2004 se anula la obligación de cotizar durante 6 meses, de manera que se pueda proteger a las mujeres que están viviendo esa situación. Además, durante ese tiempo se encontrarían en una situación asimilada al alta y ese periodo se contabilizaría como cotización efectiva a efectos de prestaciones de Seguridad Social.

Por otra parte, las mujeres víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o divorcio tendrán derecho a la pensión de viudedad, sean o no acreedoras de la pensión compensatoria. La Administración de la Seguridad Social mediante solicitud de las víctimas puede limitar y restringir el uso y acceso a sus datos personales viéndose reforzado el derecho a la intimidad, contemplado en el art. 18 CE.

Respecto a la situación de los huérfanos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer se toman las siguientes medidas según lo dispuesto en el art. 224 de la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer:

- El porcentaje de orfandad absoluta, pasa del 52% al 70% en los casos de carencia de rentas (rendimientos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional) de los miembros de la unidad familiar de convivencia.
- Se incrementa el conjunto de pensiones de orfandad cuando hay varios beneficiarios, al permitirse alcanzar el 118% de la base reguladora y establecerse una garantía de importe mínimo conjunto.
- En respuesta a la inexistencia o insuficiencia de cotización de la madre se proyectan nuevas prestaciones de orfandad en la que los huérfanos absolutos tienen derecho a recibir pensiones de orfandad. Esta prestación se calcula aplicando un porcentaje fijo (20% con carácter general o 70% en los casos de carencia de rentas) sobre la base mínima de cotización del Régimen General, pudiéndose alcanzar cuando existan varios beneficiarios el 118% de la base reguladora.

Respecto a los derechos del agresor se ven afectados por la condición de su víctima de violencia de género, estos no podrán percibir la pensión de viudedad, ni podrán percibir la pensión de orfandad de sus hijos menores. Se beneficiarán de la pensión que les hubiere correspondido sus hijos, o en su defecto, los titulares de la pensión en favor de familiares, mediante un incremento en la cuantía.

Por otra parte, en las cláusulas adicionales séptima, octava y novena de la LO 1/2004, se modificaron respectivamente el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, en aspectos de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El desarrollo de este trabajo de grado se centra en la pensión de viudedad específicamente, de la cual hablaremos a profundidad más adelante; pero también tenemos que tener en cuenta que la perspectiva de género sobre todo en aspectos relacionados a la violencia de género se proyecta en Seguridad Social española a modo de prestaciones entre las que, además de las prestaciones por muerte y supervivencia, también se encuentran las prestaciones por desempleo.

Capítulo III. Pensión de viudedad

Evolución de la pensión de viudedad

La pensión de viudedad, es una prestación económica de la Seguridad Social, perteneciente a las denominadas de muerte y supervivencia. Se encuentra regulada actualmente por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el Capítulo XIV del Título II de la Ley (artículos 219 a 223 y 231 a 234).

En un principio, esta prestación tenía como propósito atender situaciones de necesidad ocasionadas por la muerte del cónyuge (antiguamente el hombre), que provocaba un desequilibrio económico en la familia como consecuencia de la desaparición del sujeto ; encargado de proporcionar sustento a través de su trabajo remunerado, mientras que la mujer se dedicaba a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos.

No obstante, la sociedad ha evolucionado y han surgido nuevos modelos de familia, que no se asemejan a los de carácter patriarcal, los cuales limitaban al género femenino al entorno meramente doméstico. Es por esto que la pensión de viudedad ha ampliado su ámbito subjetivo y, actualmente, con la incorporación de la mujer al mercado laboral, ambos sexos pueden ser beneficiarios de la pensión de viudedad. Sin embargo, la finalidad de esta prestación ya no se basa en proteger ante una situación de necesidad, sino en compensar frente a un daño por la falta o minoración de ingresos tras el fallecimiento del cónyuge.

Por tanto, en aquellos supuestos en los que el superviviente no posea recursos económicos para subsistir, la prestación permitirá solucionar ese estado de carencia. De hecho, la ley, como consecuencia de los cambios acontecidos en la organización familiar, ha venido ampliando progresivamente el número de beneficiarios de las pensiones de viudedad, con el fin de eliminar ciertas desigualdades en el sistema de Seguridad Social español.

Inicialmente, la pensión de viudedad, establecida como derecho pleno a través de la Ley 193/1963 de Bases de Seguridad Social, iba dirigida especialmente a mujeres que perdían a sus cónyuges y se veían sumergidas en una situación de necesidad; no obstante, los hombres también podían acceder a ella siempre y cuando se hallaran incapacitados para trabajar y estuvieran sostenidos económicamente por la mujer.

Posteriormente, con la Ley 30/1981, de 7 de julio, más conocida como la Ley del Divorcio se añaden como perceptores de la pensión de viudedad aquellos cónyuges supérstites en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Cabe destacar, que la equivalencia entre hombres y mujeres no se produjo hasta el año 1983, mediante el Tribunal Constitucional con sus Sentencias 103/1983, de 22 de Noviembre y 104/1983, de 23 de noviembre; en las cuales se concedía al varón superviviente un trato semejante al que recibían las mujeres, declarando a su vez inconstitucional el art. 160.1 y 160.2 LGSS por hacer referencia al cónyuge superviviente como “la viuda” sin tener en cuenta que también podría tratarse de un hombre.

Por otra parte, en la disposición adicional primera de la LO 1/2004, se ratifica que aquellos que fueran condenados por cometer un delito doloso de homicidio, perderán el derecho de ser beneficiarios de la pensión de viudedad que les corresponda cuando la víctima de esos delitos fuera la causante de dicha pensión, a menos que en su caso exista una reconciliación entre ellos.

Lo que se intenta con los artículos 231 al 234 de la LO 1/2004 es evitar que el agresor pueda lucrarse de su víctima y obtener la pensión así este cumpla, en teoría, todos los requisitos exigidos por la normativa; por lo cual esto supone una exclusión legal por ser los causantes de la muerte de su cónyuge.

Más tarde, a través de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, se produce el reconocimiento jurídico del matrimonio entre personas del mismo sexo; por lo que también tendrían acceso a la pensión de viudedad.

Esto supuso un gran avance para las parejas homosexuales, ya que hasta la publicación de esta Ley no podían acceder a esta prestación aún cuando estos avalaran un largo período de convivencia, por no cumplir con la exigencia del art. 219 LGSS (antiguamente art. 174.1 LGSS/94) con anterioridad a la reforma realizada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, de ser “cónyuge sobreviviente”, es decir, de encontrarse casado con la persona fallecida.

La denegación de la pensión de viudedad al cónyuge sobreviviente, cuando en el momento del óbito del causante no existía la posibilidad legal ni de contraer nupcias entre sujetos del mismo sexo ni tampoco de declarar el derecho a dicha pensión a los miembros de parejas de hecho, no va en contra de los valores constitucionales al no verse vulnerado el art. 14 CE (STC 157/2014, de 6 de octubre).

Aunque también hay casos del Tribunal Constitucional como lo es la sentencia 92/2014, de 10 de junio de 2014, en la que se le deniega el amparo a una persona homosexual que solicitaba la pensión de viudedad tras convivir 40 años con su pareja, que murió en el año 2002, cuando aún en España no estaba aprobado el matrimonio homosexual. Esta persona alegaba que no pudo cumplir el requisito del matrimonio, porque para ese momento los homosexuales no podían casarse. Por lo tanto, tenían que valorar si la pensión de viudedad que estaba vigente en el año 2002 vulneraba el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, ya que para ese momento había un requisito que las parejas homosexuales no podían cumplir.

De igual forma, en la Ley 40/2007, las parejas de hecho también se convierten en beneficiarias de la prestación por viudedad, notándose la diferencia con los matrimonios nulos, divorcios y separaciones. Pero el problema con esta Ley es que en los tres últimos conceptos nombrados, le exigía a la viuda que cobrara una pensión compensatoria, y por distintas razones la viuda no la cobraba, ya sea por: haber renunciado a ella, haber firmado rápido un acuerdo de separación, desconocimiento de la legislación vigente, entre otras razones.

Y es allí cuando se incorpora en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, el que no les sea exigido una pensión compensatoria y se introducen los requisitos que exhortan cuando a estas se les puede considerar víctimas de violencia de género, que se regulan a través del articulado de la LO 1/2004 y LO 3/2007 de manera integrada.

Todos estos cambios acontecidos han provocado que la pensión de viudedad haya sido objeto de reformas durante los últimos años; y actualmente, se sigue planteando una renovación de la misma. Sin

embargo, a pesar de ser conscientes de que esta prestación necesita ser modificada aún no se sabe que aspecto de la misma tiene que reformularse.

Ya que se trata de una pensión que, pese a que no se plantea como una pensión para cubrir estados de carencia, si lo fue y es en su esencia, una prestación que permite que las mujeres no queden abocadas a la indigencia (esta se considera una pensión feminizada debido al gran número de mujeres que son beneficiarias)¹⁴.

Según Serrano (2010), entre las transformaciones que se podrían llevar a cabo en la pensión de viudedad, se encuentran: incompatibilizar la misma con otras prestaciones, aumentar su cuantía económica mínima, realizar cambios que la aproximan al propósito de cubrir estados de carencia, o considerarla como renta de sustitución; no obstante, aún queda un largo camino para que se produzca alguna de estas modificaciones debido a los vaivenes legales de esta pensión y a la poca adecuación normativa a las nuevas realidades sociales.

Pensión de viudedad: cónyugues y excónyugues víctimas de violencia de género

La pensión de viudedad es una prestación contributiva en la que tanto el fallecido como la pareja están obligados a cumplir ciertos requisitos. Según el art. 219 LGSS, los requisitos que debe cumplir el causante son los siguientes:

- Primeramente, para que dicha prestación exista, el sujeto causante debía de haber estado dado de alta en el Régimen General (RG) o en una situación asimilada, habiendo cotizado al menos 500 días en los cinco años anteriores. Si en el momento del fallecimiento no estaba dado de alta, se exigen como mínimo 15 años de cotización. Y si este ha sido derivado por accidente de trabajo, o común, o por enfermedad profesional no es exigible cotización mínima.
- Que en el momento del fallecimiento estuviese percibiendo una pensión de jubilación contributiva o tuviese derecho a ella.
- Fuera el causante pensionista por incapacidad permanente.
- Cumpliese con la cotización pertinente para crear derecho al subsidio por IT, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia.

La función protectora de la pensión de viudedad es de carácter sustitutivo y equipara a tres casos de ruptura del matrimonio: divorcio, separación o nulidad de este.

Tal y cómo se cita en el art.220 LGSS para obtener una pensión de viudedad las mujeres pueden acreditar que hubieren sido víctimas de violencia de género en el momento de la separación o el divorcio, aun no estando beneficiándose de la pensión compensatoria.

Dicho concepto debe acreditarse según el art.220.2 LGSS en el momento de la separación judicial o sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento, a través

¹⁴ Según el informe de la Coordinadora Estatal para la Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE) del año 2019, las mujeres perceptoras de la pensión de viudedad equivalen a un 92,37%.

de la orden dictada a favor de la víctima o el informe del Ministerio Fiscal o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, todo esto aplicable a fallecimientos producidos a partir del 1 de enero de 2008.

Por otra parte, según lo dictado en la disposición transitoria 18ª sobre pensión de viudedad en cuando la separación judicial o divorcio sea anterior al 1 de enero de 2008, la verificación del derecho de la pensión de viudedad no estará relacionada a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión compensatoria, en los casos en los que:

- El vínculo matrimonial haya sido de mínimo 10 años.
- Entre la fecha del divorcio o separación judicial y la fecha de fallecimiento del causante no hayan pasado más de 10 años.
- Y que adicionalmente se cumple alguna de estas condiciones: que existan hijos comunes del matrimonio o que la persona beneficiaria tenga 50 años o más en la fecha de fallecimiento del causante.

Es importante puntualizar que la cuantía de esta pensión se calculará con la normativa de la Ley 40/2007. Y que estos puntos también aplican a los fallecimientos ocurridos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, siempre y cuando el divorcio o separación judicial se produjera antes del 1 de enero de 2008.

Es así como en el STS núm. 1233/2013, de 23 de junio de 2014, el TS otorga el derecho de la pensión de viudedad a la ex esposa del causante, que se encontraba separada legalmente y no era beneficiaria de la pensión compensatoria. En este caso la pensión de viudedad será proporcional al tiempo de convivencia con el causante, así existan o no otros beneficiarios.

De igual manera, el STS núm. 2397/2014, de 12 de febrero de 2016, determina que se cumple con el requisito para acceso a la pensión de viudedad de una mujer que se hallaba divorciada del causante, ya que este requisito se basa en la dependencia económica, y en su caso, al su ex-cónyuge fallecer, pone fin a la fuente económica que este representaba. En esta sentencia la actora estuvo unida en matrimonio con el fallecido desde 1976 hasta 1998 , cuyo óbito se produjo en 2011. En dicha relación nacieron 2 hijos .La demandante solicitó la prestación de viudedad que le correspondiera pero el INSS se la denegó. En la sentencia de separación se acordó que la actora disfrutará de la vivienda familiar y de los hijos comunes, mientras que el fallecido abonaría la cuantía correspondiente a las cargas familiares y se haría cargo de los pagos surgidos en el matrimonio , aunque en dicha sentencia se cita expresamente que no cabe lugar a la percepción de pensión compensatoria. Después de la desestimación la autora volvió a reclamar alegando que el reconocimiento de cualquiera que sea una suma periódica en favor de ella tiene la naturaleza de pensión compensatoria. Por tanto al ser una prestación que se ve cortada por el fallecimiento del deudor que causa dependencia a la supérstite se le es considerada finalmente compensatoria con independencia de su naturaleza jurídica de la misma.

Por otra parte, en el art. 220. 3 LGSS se reconoce el derecho a la pensión de viudedad si se declara la nulidad del matrimonio, ya que al superviviente le corresponde esa pensión gracias al derecho a la indemnización del artículo 98 del Código Civil, en el que se determina que el cónyuge al que se le haya declarado nulo el matrimonio tendrá el derecho a una indemnización en proporción al tiempo vivido con el causante, siempre que se atiendan las circunstancias previstas en el artículo 97.

Mientras que el artículo 97 del Código Civil expresa que el “El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia”; por lo cual los organismos públicos también toman en cuenta a las personas con estas circunstancias.

Cabe destacar, que la exigencia de la pensión compensatoria perjudicaba a las víctimas de violencia de género ya que debido a la situación en la que se encontraban, muchas de ellas no eran perceptoras de la misma, y por ende tampoco tenían acceso a la pensión de viudedad. Además, en muchas ocasiones, estas mujeres tampoco se podían acoger a la Disposición Transitoria 18ª por no cumplir con los requisitos establecidos en ella. Por tanto, era difícil poder percibir la pensión de viudedad para mujeres que sufrían este tipo de violencia.

Protección especial a las víctimas de violencia de género

La violencia machista es la muestra más evidente y extrema de desigualdad entre hombres y mujeres, fruto de una estructura de roles anticuada basada en el patriarcado. Este tipo de violencia afecta a mujeres de todo tipo sin distinguir entre su raza, clase social, etc.; repercutiendo negativamente en su vida laboral y privada.

Si nos centramos en la pensión de viudedad, podemos decir que ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiempo, pero una que merece especial relevancia es la que trajo consigo la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social que entró en vigor el 1 de enero de 2008, y que incorpora el argumento del art.174.2 LGSS (actual art.220.1 LGSS), referente a la pensión de viudedad en situaciones de separación y divorcio judicial, el requerimiento de ser acreedor de pensión compensatoria, teniendo que extinguirse ésta por la muerte del sujeto causante, para poder percibir la pensión de viudedad.

Esto provocó que muchas víctimas de violencia de género no pudieran tener acceso a esta prestación, ya que la mayoría de ellas, o bien por estar desinformadas sobre la normativa presente en ese momento, o por priorizar la concesión de la custodia de sus hijos, preferían renunciar a la pensión compensatoria, lo que impedía causar la pensión de viudedad.

Es preciso mencionar que hubo algunas excepciones, en las cuales los órganos jurisdiccionales decidieron flexibilizar el requisito de la pensión compensatoria y aplicar una perspectiva de género, como ocurrió en la Sentencia del TSJ Cantabria, número 80/2009, de 4 de febrero de 2009, en la cual se le concede la pensión de viudedad a la actora. Mantuvo matrimonio con el fallecido hasta el año 2005 de cuya relación nace un descendiente. El óbito se produjo en 2008. Desde el año 2003 se conocía el problema de alcoholismo del fallecido que además durante este período de tiempo fue condenado por malos tratos. Tras el trágico hecho causante del fallecimiento la demandante solicitó la pensión de viudedad que le hubiere pertenecido, la cual fue impugnada por el INSS. En esta desestimación se alegó la veracidad de la unión matrimonial, la separación de esta y la respectiva pensión alimenticia a favor del hijo, así como que la demandante no era perceptora de una pensión compensatoria. Mediante recurso de suplicación a favor de

la actora se estimó que el no ser perceptora de la pensión compensatoria fue presumible por autoprotección e indiscriminación en la interpretación de las Leyes Orgánicas citadas 1/2004 y la 3/2007.

No obstante, con la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2010 (que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2010) se añadió un nuevo párrafo al art. 174.2 LGSS, en el que esa indispensable dependencia económica en forma de pensión compensatoria del art. 97 CC fue eliminada para aquellas mujeres que fueran víctimas de violencia machista.

Es necesario destacar, que entre la entrada en vigor de la petición de la pensión compensatoria (2008) y la modificación del precepto para excluir a las víctimas de violencia machista de tal requerimiento (2010) pasaron dos años, por lo que se podría crear un debate en cuanto a la utilización de la instrucción.

Con el fin de prevenir que esto se produjera, la Disposición Transitoria 18ª de la LGSS-94 añadió la norma transitoria acerca de la pensión de viudedad en casos de separación judicial o divorcio que fueran con carácter previo al 1 de enero de 2008, que sigue en la vigente Disposición Transitoria 13ª de la LGSS-2015.

Por tanto, el propósito del legislador introduciendo la exención de ese requisito, es que las mujeres que sufren violencia de género puedan tener acceso a la pensión de viudedad sin tener en cuenta el hecho de que sean acreedoras de pensión compensatoria, por lo que no se les demanda la compensación del desequilibrio económico fijado para las demás perceptoras.

De esta manera, en los casos de violencia machista producidos en el momento de la separación o divorcio, pese a que no haya pensión compensatoria, estas mujeres pueden percibir esta prestación, siempre y cuando las mismas demuestren su condición de víctimas.

La razón por la que fue suprimida esta exigencia, es que se tienen en cuenta los abusos sufridos por estas mujeres, los que en la mayor parte de los supuestos son la causa por la que no quieren aceptar la pensión compensatoria; debido a que tienen miedo al agresor y prefieren priorizar su defensa y protección.

Tal y como hemos dicho, para que las víctimas de violencia de género puedan ser beneficiarias de la pensión de viudedad tienen que justificar la condición de víctimas en los siguientes casos:

“En el momento de la separación judicial o divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en caso de que no exista sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho” (tercer párrafo del art. 220.1 de la LGSS).

Al permitir demostrar los casos de violencia machista mediante “cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho” según el art. 220.1 de la LGSS, la voluntad del legislador es incrementar la protección de las mujeres que sufren este tipo de violencia que por encontrarse en circunstancias de desamparo no han podido ejercer acciones legales en contra de su ex-cónyuge.

Pensión de viudedad: víctimas de violencia de género y parejas de hecho

Para ser pareja de hecho no hay que tener únicamente una vida similar a la marital, sino que se exigen una serie de requisitos. En primer lugar, hay que acreditar mediante certificación de la inscripción en cualquiera de los registros existentes.

Dicha formalización debe de producirse con una antelación de al menos dos años al fallecimiento del causante de la pensión. Según el art. 221.1 LGSS, para ser beneficiario de la pensión de viudedad se debe cumplir con los siguientes apartados:

- Los requisitos tanto de cotización como de alta que se citan en el art.219 LGSS.
- La acreditación de que en el año anterior al fallecimiento del causante los ingresos no alcanzarán el 50 por ciento del total en el mismo cómputo de tiempo. Cuyo porcentaje se ve reducido al 25 por ciento en el caso de que no existan hijos comunes.
- Si los ingresos del que fuera beneficiario no resulten superiores a 1.5 veces al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que estuviese vigente en el momento del hecho causante como en el período de su percepción.
- Una convivencia ininterrumpida no inferior a cinco años cuya certificación expresa debe realizarse mediante el empadronamiento.

Por ejemplo, la STS núm. 4784/2017, de 12 de diciembre de 2017, vincula a la mujer víctima de violencia de género y las relaciones afectivas similares a las conyugales. Se trata de una pareja conviviente sin registro en las entidades oportunas. En esta sentencia se interpreta que la acreditación de la pareja de hecho se debe realizar de acuerdo a la LGSS, por lo que no se atribuye eficacia a sentencias anteriores dictadas en otros juzgados y en las cuales solo se acreditan la ruptura de la pareja, pero en las que no se permite el establecimiento de la misma por documentos públicos, como realmente exige la norma¹⁵. La demandante mantuvo una relación análoga a la conyugal y de convivencia con el fallecido desde 1990. De dicha relación nacieron dos hijos. El fallecido en 2005 fue autor de delito de amenazas y la custodia y guarda de los hijos recayó en la mujer, así como el uso de la vivienda familiar, así como la imposición de orden de alejamiento. A partir de dichos actos se dio por finalizada la relación entre ambos. El fallecimiento del autor tuvo lugar en el año 2016, tras el cual la mujer solicitó la prestación de viudedad ante el INSS. Esta se le fue denegada por no mantener con el fallecido ninguna de las relaciones que dan lugar a esa pensión según lo citado en los art. 219,220 y 221 de la LGSS. Alegando que sí había acreditado la relación con su ex pareja fue desestimada por inexistencia de vínculos de matrimonio o pareja de hecho previstos en la LGSS y por no acreditar ni constitución, ni inscripción, ni ingresos con el fallecido. Realizando nueva reclamación ante el INSS, se impugna la anterior debido a que pueden ser considerados como documento oficial de reconocimiento a la previa existencia de convivencia acordado y por ende cumplido el requisito de pareja de derecho a los efectos interesados si bien no existe constancia de la inscripción de la pareja de hecho en un registro especializado ni de su constitución en documento público, existe una sentencia que dicta una

¹⁵ Ejemplo extraído de Marco Francia, M. P. y González Soria, J. C. (2019). Violencia de género y pensión de viudedad de la Seguridad Social en España. La perspectiva de género y el género en perspectiva para la consecución de la justicia material y avanzar en igualdad. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, (Nº Extraordinario 1), pp. 323-343.

orden de alejamiento del causante por delito el ámbito familiar y otra en la que se atribuye a la actora la guardia y custodia de los hijos y el uso de la vivienda . No conforme con esta sentencia el INSS reclama y se desestima lo impugnado por alegar este que la demandante no cumple con los requisitos y no consta que la pareja de hecho que durante 15 años formaron se inscribiese en un Registro y tampoco consta su constitución en un documento público en los términos que aparecen en el art, 221.2 LGSS ,por tanto no pudiendo dar eficacia a efectos de acreditar su existencia y que las otras resoluciones dan noticia de que rompieron la relación que les vinculaba pero no la constitución que el precepto anterior menciona.

La gran diferencia para obtener la pensión de viudedad de un matrimonio y una pareja de hecho está en la dependencia económica del sobreviviente, la convivencia mencionada en los apartados anteriores así cómo su correcta publicidad. No obstante, tal precepto no exige ser beneficiaria de la pensión compensatoria, pues en la pareja de hecho no se contempla.

Estas dos situaciones no son equiparables ni cuando existe violencia de género, ya que no pervive el derecho a la pensión en esta última si no se cumplen los requisitos exigidos. Así mismo, la cuantía recibida cómo pensión en las parejas de hecho se sustenta en la proporcionalidad al tiempo convivido con el causante.

Por lo tanto, hay que considerar si existe ese trato diferente entre los matrimonios y parejas de hecho al momento de tener derecho a la pensión de viudedad, ya que esto podría vulnerar la igualdad que según el artículo 14 de la CE se prohíbe cualquier tipo de discriminación en base a “cualquier condición o circunstancia personal”¹⁶.

En la STSJ de Castilla y León-SOC núm. 376/2020, de 28 de febrero, se pueden ver claramente los requisitos para la obtención de la pensión de viudedad entre uniones matrimoniales y de parejas de hecho, ya que en esta sentencia se le niega el derecho a la pensión de viudedad a una víctima de violencia de género tras el fallecimiento de su ex pareja de hecho.

Esto sucede por el hecho de que, al dejar de existir la pareja de hecho, como en este caso, al estar dado de baja en el Registro Municipal por varios años antes del hecho causante, pues el derecho de esa prestación no subsiste. Por tanto, la diferencia entre las uniones matrimoniales o de parejas de hecho no tiene que ver con la violencia de género en sí, sino con la intención del ente legislador en mantener esa diferencia entre ambos supuestos.

En esta sentencia mencionada La autora es víctima de violencia de género, concretamente de malos tratos de su ex pareja .Dicha relación estaba constituida por una unión no matrimonial inscrita en el correspondiente Registro municipal desde 2001. Fruto de dicha relación nacieron 2 hijos. La convivencia de la pareja de hecho finalizó en 2009 tras dictarse una orden de protección en contra del fallecido, aunque no es hasta 2010 que se pone fin a su unión. Es en 2018 cuando sucede el hecho causante y la actora solicita la pensión de viudedad, la cual le fue denegada por no considerarse enmarcada en las que permiten causar derecho a la pensión. Presentó reclamación previa, que de nuevo fue desestimada y cómo última vía recurrió por recurso de suplicación que por ende tampoco fue estimado. Se basan en el art. 221 LGSS en el cual se exige la existencia de convivencia a la fecha del fallecimiento del causante y la pervivencia del

¹⁶ Según Espejo, P. (2019). La pensión de viudedad en la actualidad. Especial atención a las parejas de hecho y a las mujeres víctimas de violencia de género.

vínculo, precepto que la autora no cumple. Por ende no se contempla excepción, ni la condición de víctima de violencia de género, ya que esta solo se aplica a los casos de separación, divorcio o nulidad que disuelven un matrimonio previo en los que el superviviente puede acreditar que era víctima de violencia de género y permite eximirle del requisito de ser acreedora de la pensión compensatoria.

Es por esto que las parejas de hecho son más vulnerables frente a la protección social debido a su reconocimiento y trascendencia jurídica. Aunque según lo dispuesto en el art. 39.1 de la Constitución no existe cabida a esa desigualdad puesto que hace referencia a la protección a la familia genérica sin constar el tipo de unión.

Si alguno de estos requisitos no se cumple el sobreviviente quedaría excluido de la pensión de viudedad, así como de la prestación temporal de esta, exceptuando la situación de necesidad al amparo y protección del Régimen de la Seguridad Social.

Sin embargo, no se reconocen exigencias especiales por ser víctimas de violencia de género en estas uniones de hecho. Existe cierta incoherencia en la correlación de la exigencia de la convivencia coetánea al fallecimiento del causante agresor y la denegación de la pensión en estos casos que no la cumplen.

La acreditación de la víctima de violencia de género: Experiencia de los Tribunales del Orden Social

En este punto ya conocemos la evolución de la pensión de viudedad en España, así como los requisitos que deben cumplir quienes intentan acceder a ella, ya sean cónyuges, ex cónyuges o parejas de hecho. Pero es importante también exponer la experiencia de los tribunales en los casos que acreditan que la persona ha sido víctima de violencia de género.

Reiterando lo mencionado anteriormente, para que las víctimas de violencia de género puedan ser beneficiarias de la pensión de viudedad tienen que justificar la condición de víctimas en el momento de la separación judicial o divorcio mediante los siguientes medios:

“Mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en caso de que no exista sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho” (tercer párrafo del art. 220.1 de la LGSS).

Como hemos podido comprobar, la lista de medios que aparece en el art. 220.1 LGSS, se abre al permitir que pueda probarse “a través de cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho”. Ahí, es donde entran en juego los Tribunales los cuales establecerán qué medios pueden acreditar la condición de víctima de violencia de género y cuáles no.

Algunos ejemplos¹⁷ de medios admitidos para llevar a cabo la acreditación de condición de víctima de violencia de género son: la interposición de una denuncia por malos tratos con

¹⁷ Ejemplos extraídos de Rodríguez, S. y Gómez, F. (2018) y de Villar, I. (2016).

anterioridad a la separación (STSJ de Andalucía/Málaga núm. 314/2015, de 26 de febrero), informes de organismos públicos especializados en la tutela de mujeres o las declaraciones de los hijos del matrimonio en contra del ex-cónyuge (STSJ de Canarias, Las Palmas, de 7 de marzo, rec. núm. 1027/2016), la sentencia de separación matrimonial (STSJ de Galicia núm. 1857/2015 de 25 de marzo) y la presencia de procesos penales entre los cónyuges por insultos y amenazas antes de la separación (SSTS de 26 de enero de 2011 [RCUD 4587/2009] y de 30 de mayo de 2011 [RCUD 2598/2010]), entre otros.

Por otra parte, en la STS 709/2017, 26 de septiembre de 2017, que resuelve el RCUD 2445/2015, se observa la contradicción existente entre los distintos Tribunales por los medios probatorios. Como antecedentes de hecho, tenemos que la mujer mantuvo matrimonio con el fallecido durante 18 años. En ese cómputo de tiempo, tanto cuando se finalizó la relación marital, se produjeron abusos y amenazas hacia ella. En primera instancia, el Tribunal Constitucional estimó otorgar la pensión de viudedad mediante la acreditación de la testificación de una tercera persona, cuyo testimonio se consideró objetivo puesto que concluían pruebas de denuncia en contra del fallecido a este último, por daños en su vehículo. Esta prueba testifical fue aceptada y a la vez recurrida por el INSS, al que finalmente se le dio la razón por considerarse no acreditada la violencia de género ya que “la existencia de una denuncia así como la declaración de un testigo sobre supuestos malos tratos no acreditados resultan insuficientes para considerar acreditada la violencia de género durante la vida conyugal”. Aunque se le dio razón al ente gestor, tan pronto se recurrió de nuevo, el Tribunal de lo Social la desestimó, debido a que hay un reforzamiento de la potestad de estos para ampliar las interpretaciones intentando proteger a la víctima. Ya que por ende este tipo de violencia se define en el art. 1 de la LO 1/2004 para la cual es “todo acto de violencia física y psicológica” que “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia”. Por tanto, al demostrar la existencia de violencia de género se le concede la pensión de viudedad a la accionante.

Así mismo, el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado sobre la violencia de género en casos donde existía una denuncia por malos tratos que fue presentada a la policía y que coincidían con un cambio de residencia y trámites de separación, así como por asistencia psicológica del hijo (STSJ de Castilla y León-Valladolid, de 23 de febrero de 2016), los cuales fueron admitidos como medios de prueba para la acreditación de la existencia de violencia de género. Puesto que, el art. 220.1 LGSS no fija un catálogo cerrado de medios con los que se pueda avalar la violencia machista, sino que al admitir “cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho” abre un abanico con el que poder constatar la existencia de este tipo de violencia. En este supuesto el Tribunal, estimó que había bastantes datos para avalar que la actora sufrió violencia de género. Y es por ello, que se le concedió la pensión de viudedad.

En otro supuesto, como la STSJ Comunidad Valenciana de 8 de marzo de 2017, R^o 1169/2016, entre otros, la víctima generó denuncias por malos tratos, y estas fueron presentadas, pero luego archivadas con sentencia de absolución del denunciado, ya que la denunciante no compareció en esos casos¹⁸. Otro caso similar, es la STS 19 julio de 2012, RCUD 3671/2011, en la cual a la actora se le deniega la pensión de viudedad en un principio (9-11-2009) ya que la interesada no tenía acceso a pensión compensatoria en el momento del fallecimiento del cónyuge (21-08-2009) aplicando el art. 174.2 LGSS/94

¹⁸ Ejemplos extraídos de García Testal, E. (2018). Violencia de género y pensión de viudedad: la acreditación de las situaciones de violencia de género. Lex Social: Revista De Derechos Sociales, N^o 8, pp. 131-146.

(actual art. 220.1), en su redacción previa a la transformación realizada por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, la cual entró en vigor el 1-1-2010. Modificación en la cual no se les solicitaba la pensión compensatoria tras el fallecimiento de sus cónyuges, a aquellas mujeres que fueran víctimas de violencia de género.

En los hechos probados, se acredita que la viuda sufrió malos tratos durante todo el matrimonio. De hecho, formuló una denuncia a causa de los mismos en contra de su ex marido la cual terminó siendo archivada, con una absolución del denunciado por no haber comparecido en juicio. La recurrente expone que no compareció al juicio ya que "para evitar ir a juicio, su marido accedió a la separación judicial, procediendo a firmar el correspondiente convenio regulador de la separación", con lo cual pudo conseguir la sentencia de separación por mutuo acuerdo. Finalmente, la separación judicial entre ambos se produjo con fecha 16/11/1993.

Al demostrar la existencia de violencia machista, se le aplica el art. 174.2 LGSS (actual art. 220.1) en su nueva redacción por haber tenido lugar la muerte del cónyuge (hecho causante) el día 21 de agosto de 2009, por ende, la actora tiene derecho a pensión de viudedad.

En otro caso del Tribunal Supremo, el STS de 26 de enero de 2011 (RCUD 4587/2009), se le reconoció la pensión de viudedad a una mujer no acreedora de la pensión compensatoria, y en donde además pasaron más de 10 años entre la fecha de separación o divorcio y la del fallecimiento. En este caso se realizó una aplicación "pro beneficiaria" por la existencia de violencia de género basados en el art. 174.2 de la LGSS/94, puesto que en el momento de la separación judicial la actora era víctima de violencia machista por existir procedimientos penales entre los cónyuges por amenazas e insultos antes y después de la separación. Además, de haberse probado el etilismo crónico que sufría el agresor.

Por otro lado, el hecho causante (muerte del marido) fue el día 4 de marzo de 2008, o sea, acontecido el hecho causante entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, se le aplica como ya hemos dicho anteriormente el segundo apartado del art. 174 LGSS/94; sin requerir que cumpliera con el requerimiento de tener acceso a pensión compensatoria, tal y como se relata imperativamente en el último párrafo de la Disposición 18ª de la LGSS. En el que, se establece que "Lo dispuesto en esta disposición transitoria será también de aplicación a los hechos causantes producidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, e igualmente les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 174, apartado 2, de esta Ley."

Uno de los casos más interesantes es el STSJ de Andalucía núm. 2206/2019, de 19 de septiembre de 2019, ya que en esta sentencia se cuestiona el hecho de conceder la pensión de viudedad, puesto que la actora no percibía pensión compensatoria y el divorcio no se produjo antes del 1 de Enero de 2008 (05-07-11). Además, de considerar que en la fecha del divorcio o próxima a la misma no se produjo una situación de violencia de género, requisito indispensable para poder tener acceso a esta prestación, en el caso de no ser acreedora de pensión compensatoria (art. 220.1 LGSS).

No obstante, se demostró que durante el matrimonio la mujer sufrió agresiones (físicas y psicológicas), las cuales aumentaban cuando el cónyuge se encontraba ebrio, llegando al extremo de amenazarla de muerte. Lo cual provocó una convivencia insostenible, que llevó a los cónyuges a divorciarse de común acuerdo. Además, cabe destacar que posteriormente, la actora formuló varias denuncias en contra de su ex- cónyuge, por las cuales le condenaron al mismo por un delito de amenazas y falta de vejaciones. Partiendo de todos estos datos, se considera la existencia de un supuesto de violencia

machista, tanto durante el matrimonio como en fechas cercanas al divorcio. Dado que el hecho de que la mujer sufriera malos tratos durante el vínculo matrimonial, constata que los mismos se dieron de forma prolongada y que se extendieron desde el principio hasta el final cuando se divorciaron.

Por ende, al acreditar la situación de violencia de género, los tribunales fallaron en concederla la pensión de viudedad a la actora.

Conclusiones

Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo de investigación, la pensión de viudedad si puede ser otorgada a los cónyuges, ex-cónyuges o a las parejas de hecho, si estas cumplen con ciertos requisitos para poder hacer uso de la prestación por muerte y supervivencia de la Seguridad Social.

Y esta es una cuestión importante y un avance en esta materia, ya que de esta forma no se deja desprotegida a la persona que en algún punto de su vida ha sufrido violencia de género por parte de su pareja sentimental; además, esto abre las puertas a que se reporten y se expongan estos casos que en muchas ocasiones se conocen solo dentro del mismo entorno familiar.

Eso sí, es importante aclarar que dentro del régimen de la Seguridad Social existe un trato diferente entre los matrimonios y las parejas de hecho, este trato es desigual, y si bien es cierto que este trato está reconocido a nivel constitucional, no debería existir y se debería equilibrar la balanza en este sentido porque en ese punto estamos hablando de violencia de género independientemente del tipo relación legal que tengas con el agresor.

Así mismo, existe un vacío legal en cuanto a las parejas de hecho y los matrimonios nulos, porque dentro de la ley no se encuentra ningún régimen previsto para estos casos, lo cual genera que las mujeres víctimas de violencia de género queden desprotegidas cuando se encuentran en esa situación.

Todo ciudadano tiene la libertad de elegir su emparejamiento, pero como voto particular la ley no debería de hacer vulnerable a ningún grupo cualquiera que sea la elección que se tome. Hay que equiparar medidas junto con los requisitos para que las conclusiones así en cierta manera sean adquiridas con la mayor objetividad posible e incluso pensamos que se ahorrarían numerosos recursos a sentencia.

Por otro lado, se logró comprender cómo definen la violencia de género distintas instituciones españolas y qué normativas regulan este hecho. De igual manera, nos adentramos a conocer datos estadísticos sobre la violencia de género, en los que pudimos encontrar hechos tan relevantes como el incremento de feminicidios en el año 2014.

Así como también pudimos comprender que a partir del año 2017 ha habido un aumento de las denuncias por violencia de género recibidas por el Poder Judicial de España, y también se ha acrecentado el número de órdenes de protección solicitadas por víctimas de violencia de género a partir del año 2014.

Al analizar las cifras y estadísticas proporcionadas por los entes competentes, nos trasladamos a examinar la perspectiva de género que utiliza el derecho de la Seguridad Social para poder discernir si realmente el enfoque que esta institución incorpora en sus proyectos y programas permiten que se promueva la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres.

En este sentido pudimos notar que es de real importancia que se introduzca la perspectiva de género en las distintas áreas de materias jurídicas, sociales y culturales que posibiliten fomentar la igualdad entre todos los ciudadanos y de esta manera se puedan, poco a poco, eliminar los estereotipos de género y tendencias discriminatorias en la sociedad.

Y parte de la solución a este hecho era indicar cómo se encuentra actualmente la normativa sobre la pensión de viudedad en España, y cuál ha sido su evolución a través de los años de acuerdo al progreso que también se ha suscitado en la sociedad española.

Entre los años 2007 y 2010 se introdujeron cambios relevantes en la ley en la que se le proporcionaba una protección especial a las personas que habían sido víctimas de violencia de género. Con esta mejora de la ley se pretende ayudar a mujeres y hombres que sufrieron de algún tipo de abuso o agresión para que estos no se queden en alguna situación de desprotección o desamparo al no haber ejercido algún tipo de acción legal por miedo al agresor/a.

Pero para poder acceder a la pensión de viudedad, hay que cumplir una serie de requisitos que varía dependiendo del caso en el que la persona se encuentre, ya sea que esté en un matrimonio o con una pareja de hecho en la que se haya sufrido violencia de género.

Por otra parte, como hemos venido reiterando, en los casos de separación judicial o divorcio, las mujeres que no tengan acceso a la pensión compensatoria podrán acceder a la pensión de viudedad siempre y cuando acrediten haber sido víctimas de violencia de género, a través de los medios que aparecen en el art. 220.1 LGS. Entre ellos, se habla de que se puede acreditar mediante “cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho”, buscando que los Tribunales puedan aumentar la protección de estas mujeres, realizando interpretaciones amplias de la normativa de violencia de género, en concreto, de aquellos actos que puedan ser constitutivos de los mismos, con la voluntad de proteger los intereses de estas mujeres.

Respecto a este ítem, la normativa autorizada ya sea para obtener la prestación o acreditar ser víctima de violencia de género están redactadas con demasiada generalidad, y de ahí nace la particularidad de las denegaciones o no de éstas.

Finalmente, en un sentido amplio, hemos podido reflejar a lo largo de este trabajo de investigación la relación existente entre la pensión de viudedad y la violencia de género desde el criterio de la Seguridad Social española, en la que a través de cada uno de estos capítulos pudimos detallar distintos decretos y leyes que forman parte del actuar de esta institución ante los ciudadanos.

Y con esto pudimos constatar que existen medidas que se pudieran utilizar para distintos casos en los que hay una mujer víctima de violencia de género involucrada, así como algunos casos donde se le negaría la pensión de viudedad por no cumplir algunos de los requisitos previstos en esta normativa.

Referencias

Referencias bibliográficas

Arias, F. (2012). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica* (6ª Edición). Caracas, Venezuela: Editorial Episteme.

Cabrera, M. (2010). *Poder y Dolor: análisis sociológicos de los factores desencadenantes de la violencia de género en las relaciones de pareja*. Granada, España.

Comas, D. (1995). *Trabajo, género, cultura: la construcción de desigualdades entre hombres y mujeres*. España: Icaria Editorial.

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) (1997). Coordinación de Políticas y actividades de los organismos especializados y demás órganos del Sistema de Naciones Unidas.

Covas, S., Maravall, J. y Bonino, L. (2009). *Hombres con valores igualitarios: historias de vida, logros alcanzados y cambios pendientes*. Madrid, España: Ministerio de Igualdad.

Espejo, P. (2019). La pensión de viudedad en la actualidad. Especial atención a las parejas de hecho y a las mujeres víctimas de violencia de género. En Álvarez, J., Aragüez, L., Cardeñas, V., Domínguez, L., Espejo, P., Gómez, M., Gutiérrez, M., Macías, M., Martínez, S., McKenzie, S., Millán, M., Rodríguez, M., Ordoñez, M., Ortiz, F., Papp, M., Perán, S., Ruiz, J., Seegmuller, L., Vigo, F., & Vila, F., *Estudios sobre la mujer trabajadora y su protección jurídica* (pp. 231-241). Murcia, España: Ediciones Laborum.

Fernández López, M.F. (2005). *La dimensión laboral de la violencia de género (comentario a la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre)*. Albacete, España: Bomarzo.

García Testal, E. (2018). Violencia de género y pensión de viudedad: la acreditación de las situaciones de violencia de género. *Lex Social: Revista De Derechos Sociales*, Nº 8, pp. 131-146.

Hamberger, L.K. y Hastings, J.E. (1986). Personality correlates of men who abuse their partners: A cross-validation study. *Journal of Family Violence*, Nº 1, pp. 323-341.

Marco Francia, M. P. y González Soria, J. C. (2019). Violencia de género y pensión de viudedad de la Seguridad Social en España. La perspectiva de género y el género en perspectiva para la consecución de la justicia material y avanzar en igualdad. *Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social*, (Nº Extraordinario 1), pp. 323-343.

Martín Puente, R. (2014). Evaluación psicológica de víctimas de violencia de género mediante técnicas proyectivas. *Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia*, Nº 4, pp. 1-26.

Menéndez Sebastián, P. (2017). Pensión de viudedad y “violencia machista”: El enfoque de género desde la interpretación. *RTSS. CEF*, Nº 410, pp. 148-154.

Moriana, G. (2013). *Entre la exclusión y la violencia. Las mujeres institucionalizadas en los centros de protección de mujeres de la comunidad valenciana* (tesis doctoral). Universitat de València, España.

Rincón, P. (2003). Trastorno de estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica: Evaluación de programas de intervención (tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, España.

Rodríguez, S. y Gómez, F. (2018). La influencia de la violencia de género para el acceso a la pensión de viudedad a la luz de los pronunciamientos judiciales. *Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum*, Nº 16, pp. 169-183.

Sanz Sáez, C. (2019). Medidas de protección laboral y de seguridad social para víctimas de violencia de género. *FEMERIS Revista Multidisciplinar de Estudios de Género*, Nº 4, pp. 105-131.

Serrano Argüello, N. (2010). Pensión de viudedad para excónyuges víctimas de violencia de género, de la denegación judicial a la nueva regulación legal. *Revista Doctrinal Aranzadi Social*, Nº 3, pp. 53-68.

Soriano Arroquia, E.M. (2016). Pensión de viudedad y víctima de violencia de género: un uso social de la norma legal. *RTSS. CEF*, Nº 398, 163-167.

Villar, I. (2016). Pensión de Viudedad y Derecho a la Igualdad: Puntos críticos de la jurisprudencia más reciente. *RTSS. CEF*, Nº 400, pp. 47-72.

Referencias electrónicas

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (S/F). Resumen de la Ley De Protección Integral Contra la Violencia de Género. Extracto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Recuperado el 31 de octubre de 2020 de https://www.aeropuertodebarcelona.net/index_archivos/documentos/descargas/tema_empleo/resumen_ley_1-2004.pdf.

Bonache Miralles, J. (2017). La pensión de viudedad en España: Análisis crítico de la regulación actual. *Anales De Derecho*, Nº 35. Recuperado el 01 de noviembre de 2020 de <https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/268171>.

Consejo de Europa (2011). Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Recuperado el 24 de octubre de 2020 de <https://rm.coe.int/1680462543>.

Consejo General del Poder Judicial de España (S/F). Datos sobre Violencia sobre la mujer en la estadística del CGPJ. Recuperado el 11 de octubre de 2020 de <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/>.

Consejo General del Poder Judicial de España (2017). Sentencia SOCIAL Nº 560/2017. Recuperado el 31 de octubre de 2020 de <http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b93bd24178c74ab5>.

Consejo General del Poder Judicial (2020). Análisis de las sentencias dictadas en el año 2018 relativas a homicidios o asesinatos por violencia de género y doméstica. Recuperado el 04 de noviembre de 2020

<http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20JUDICIAL/ESTUDIOS%20Y%20ENCUESTAS/ESTUDIOS/FICHERO/20201026%20Estudio%20Sentencias%20TJ%20Y%20AP%20m uertes%20pareja%20o%20expareja%20y%20menores%20%202018.pdf>.

Consejo General del Poder Judicial (2020). El Observatorio publica un estudio estadístico sobre las mil víctimas mortales de la violencia machista asesinadas entre enero de 2003 y abril de 2019. Recuperado el 04 de noviembre de 2020 de http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/NOTAS%20DE%20PRENSA/NdP_Informe_1000_victimas_JUN%202020.pdf

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2011). El estado de la cuestión en el estudio de la violencia de género. España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recuperado el 10 de octubre de 2020 de chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2011/pdf/Estado_cuestion_VG.pdf.

Gabilos (S/F). Muerte y supervivencia. Recuperado el 09 de noviembre de 2020 de <https://www.gabilos.com/weblaboral/seguridadsocial/textoMuerteSupervivencia.htm>.

Iberley (2016). Caso práctico: Pensión de viudedad en supuestos de separación judicial o divorcio anteriores al 1 de enero de 2008 (DT13 LGSS). Recuperado el 07 de noviembre de 2020 de <https://www.iberley.es/practicos/caso-practico-pension-viudedad-supuestos-separacion-judicial-divorcio-antiores-1-enero-2008-dt13-lgss-9851>.

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (S/F). Órdenes de protección según Comunidad Autónoma. Recuperado el 10 de octubre de 2020 de <https://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/AmbitoJudicial.htm>.

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (S/F). Porcentaje de mujeres maltratadas según comunidad autónoma. Recuperado el 10 de octubre de 2020 de <https://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/Macroencuestas.htm>.

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (S/F). Víctimas mortales por violencia de género que habían interpuesto denuncia. Solicitud, concesión y vigencia de medidas de protección en favor de la víctima. Recuperado el 10 de octubre de 2020 de <https://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/VictimasMortalesVG.htm>.

Instituto Nacional de Estadística (S/F). Víctimas mortales por violencia de género por periodo. Recuperado el 11 de octubre de 2020 de https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/I0/&file=v02001.px&L=0.

Laboral Social (2014). Parejas homosexuales y pensión de viudedad: ¿Supuestos semejantes, soluciones diferentes? (Con ocasión de las SSTC de 10 y 12 de junio de junio de 2014). Recuperado el 13 de noviembre de 2020 de <https://www.laboral-social.com/pension-viudedad-parejas-hecho-homosexuales-tribunal-constitucional-igualdad.html>.

Ministerio de Igualdad (S/F). Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Recuperado el 30 de octubre de 2020 de <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/definicion/home.htm>.

Noticias Jurídicas (2010). Pensión de Viudedad en Separación o Divorcio año 2010. Importante Novedad para Viudos, Separados y Divorciados. Recuperado el 07 de noviembre de 2020 de <https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4530-pension-de-viudedad-en-separacion-o-divorcio-ano-2010-importante-novedad-para-viudos-separados-y-divorciados/>.

Ortiz, J. (S/F). Investigación exploratoria: tipos, metodología y ejemplos. Recuperado el 22 de octubre de 2020 de <https://www.lifeder.com/investigacion-exploratoria/>.

Seguridad Social (S/F). Causantes / Beneficiarios. Recuperado el 01 de noviembre de 2020 de <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10964/10966/28489/28490>.

Seguridad Social (2019). La pensión de viudedad: preguntas y respuestas. Recuperado el 01 de noviembre de 2020 de <https://revista.seg-social.es/2019/02/01/la-pension-de-viudedad-preguntas-y-respuestas/#:~:text=En%20sentido%20general%2C%20podr%C3%ADamos%20decir,situaci%C3%B3n%20concreta%20de%20la%20pareja>

Seguridad Social (2019). Prestaciones de muerte y supervivencia. Recuperado el 09 de noviembre de 2020 de <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45659>.

Seguridad Social (S/F). Violencia contra la mujer. Recuperado el 22 de octubre de 2020 de <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/9b5e05b9-90f9-490d-9fde-0cb3446fed9e#:~:text=Las%20mujeres%20v%C3%ADctimas%20de%20violencia,acreedoras%20de%20la%20pensi%C3%B3n%20compensatoria>.

Legislación

Decreto-ley de 1955. Decreto-ley de 2 de septiembre de 1955 por el que se eleva la prestación del Seguro de Vejez e Invalidez. 23 de octubre de 1955. BOE número 296.

Ley 193/1963 de 1963. Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social. 30 de diciembre de 1963. BOE número 312.

Ley 30/1981 de 1981. Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. 20 de julio de 1981. BOE número 172.

Sentencia número 103/1983 de 1983. Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad número 301/1982. Sentencia número 103/1983, de 22 de noviembre, y votos particulares. 14 de diciembre de 1983. BOE número 298.

Sentencia número 104/1983 de 1983. Pleno. Cuestión de inconstitucionalidad número 288/1982. Sentencia número 104/1983, de 23 de noviembre. 14 de diciembre de 1983. BOE número 298.

Real Decreto Legislativo 1/1994 de 1994. Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social [Disposición derogada]. 29/06/1994. BOE número 154.

Ley Orgánica 1/2004 de 2004. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 29 de diciembre de 2004. BOE número 313.

Ley 13/2005 de 2005. Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. 02 de julio de 2005. BOE número 157.

Ley Orgánica 3/2007 de 2007. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 23 de marzo de 2007. BOE número 71.

Ley 40/2007 de 2007. Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. 05 de diciembre de 2007. BOE número 291.

Ley 26/2009 de 2009. Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 24 de diciembre de 2009. BOE número 309.

Directiva 2012/29/UE de 2012. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI de Consejo. 14 de noviembre de 2012. Diario Oficial de la Unión Europea.

Real Decreto Legislativo 8/2015 de 2015. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 31 de octubre de 2015. BOE número 261.

Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. BOE número 53.